

*El camino del consuelo**

HUGO CÉSAR MORENO HERNÁNDEZ**

La violencia a la que nos enfrentamos actualmente se escribe y aparece con caligrafías tan gruesas que hacen imposible voltear la mirada. No se trata de novedades estilísticas, sino de encuentros novedosos para nuestros ojos, acostumbrados a reconocer la tortura y el terror bajo la mano entrenada del ejército o las policías más infames. Esos actores escribían la violencia con una caligrafía fina, tratando de ocultar los hechos entre los pliegues del ejercicio del gobierno y la cotidianidad. Se trataba de mantener el control, de gobernar los cuerpos y mantener el margen más o menos administrado. Se trataba del ejercicio caligráfico de un ogro filantrópico, el cual poco a poco se convirtió al neoliberalismo dejando ver claramente todo su odio hacia lo humano: “Entre 1997 y 2007 la media nacional de homicidios dolosos por 100 mil habitantes disminuye de 17 a 10. A partir de 2007, y ya con la ofensiva gubernamental en marcha, la violencia va a repuntar a trancos” (p. 29). Las cifras, ofrecidas por Jesús Suaste Cherizola, más que un diagnóstico, significan la presentación de la gramática con que hoy comprendemos la violencia. Una gramática que no busca las buenas formas, sino las formas grotescas, espectaculares, alarmantes.

Allí donde existan operativos conjuntos los homicidios se multiplicarán de un año a otro: de 128 a 520 en Michoacán, de 90 a 540 en Baja California, de 90 a mil 209 en Tamaulipas, de 299 a mil 137 en Guerrero, de 426 a mil 815 en Sinaloa. Chihuahua es el caso más dramático: en 2007 se registran 244 asesinatos. En marzo de 2008 se pone en marcha el Operativo Conjunto y se registran mil 992 durante los diez meses posteriores, 3 mil 345 durante 2009 y 4 mil 427 durante 2010. Respecto del

*Suaste, Cherizola, Jesús. *El país del dolor. Historia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad*. México, Ediciones Proceso, 2017.

** Profesor-investigador en el Posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélaz Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexico. (hcmor@hotmail.com) orcid.org/0000-0003-1709-3955

año anterior al lanzamiento del operativo el número de homicidios se habrá multiplicado 17 veces (p. 29).

Esta eficiencia de la muerte parece exceder los márgenes de un Estado acostumbrado a impartir terror para mantener el control. La guerra sucia de la década de los setenta es un ejemplo de la capacidad con que el Estado mexicano sabe administrar muerte y destrucción con el fin de gobernar. La contra-insurgencia es la inteligencia de las fuerzas armadas. Pero ¿qué pasó después de 2006? La violencia homicida, a partir de la estrategia de combate “frontal” a la delincuencia organizada, se elevó dantescamente, lo que nos deja ver que el factor militar sirvió como elemento exponencial y no como remedio. Sin embargo, a pesar de las evidencias, cada año más contundentes, la estrategia (conocida ya como parte del sentido común de la política mexicana como guerra contra el narcotráfico) se ha mantenido hasta hoy, incluso con la pretensión de llevar un estado de emergencia o excepción al estatuto de normalidad jurídica, realizado por la Ley de Seguridad Interior, aprobada en el 2017. Jesús Suaste lo define así:

Todo en vano. A la cruzada mediática la rebaten cotidiana y consistentemente crímenes que certifican la incapacidad del gobierno para disuadir la violencia. Y todo esto en una situación que si por sus cifras y resultados insinúan la presencia de una guerra, por su estatus jurídico transcurre dentro de la normalidad legal y sin que se ponga en riesgo la supervivencia del Estado. La “excepción permanente”, que no es aquí ni mera provocación al pensamiento ni floritura retórica, es la afortunada descripción de una realidad que se halla en el oxímoron como en casa (p. 31).

Si en la poética el oxímoron funciona como herramienta expresiva, en política lo hace como forma difusa que oculta los hechos sin lograr poner los cadáveres en el armario. Muy al contrario, los cadáveres devinieron signos y símbolos que han cambiado el significado de la violencia homicida. Los resultados de esta guerra, por lo menos aquellos cacareados como resultados de política pública (quizá ahí el oxímoron, la guerra como política pública), son ostensibles en la desarticulación de los cárteles. La detención de los capos, de los cerebros malignos, de los jefes, patrones y números uno tuvo como efecto la aparición de los números dos, tres, cuatro y así según la capacidad mortífera de aquel con la suficiente audacia para tomar el lugar de los deca-

pitados (descabezamiento es una palabra que se usó mucho para referirse a la detención o asesinato de uno de los “grandes”). Si el oxímoron sirve para expresar un sentimiento enorme y confuso capaz de alcanzar los extremos de su espectro, la metáfora permite simplificar la complejidad de, por ejemplo, una estrategia fallida: pareciera que la política pública de seguridad funciona como si un bombero usara gasolina para tratar de sofocar un incendio, pero no por error, sino por un principio ideológico que le indica que el fuego sólo puede ser evitado si termina con todo, sólo cuando ya no exista algo más por ser quemado.

Más o menos en esa vía va el diagnóstico inicial presentado por Jesús Suaste para comprender el contexto en el que surge el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (*MPJD*), impulsado por el poeta Javier Sicilia, quien fuera alcanzado por el fuego a través de la muerte de su hijo, acompañado por varios amigos. *El país del dolor. Historia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad* no es la crónica sensiblera de un movimiento tan *sui generis* como éste. Un movimiento que define con claridad el estatus actual de nuestro país, que tiene en su interior todo el dolor de la muerte por asesinato y la desaparición. El *MPJD* no fue un movimiento ideológico o político, no tenía un objetivo específico en términos de una lucha clara, no se trataba de liberar a los oprimidos o de exigir la integración de los marginados. No tuvo una consistencia asible bajo los términos, digamos, de los nuevos movimientos sociales de Alain Touraine. Si tuvo un sujeto, éste fue la víctima cansada de su victimización. Esta crónica-ensayo presentada por Suaste nos ayuda a comprender este movimiento-acontecimiento y brinda claves para orientar por qué lado se puede dar inteligibilidad a los contornos de los movimientos sociales contemporáneos.

En primera instancia, este movimiento se gestó desde la voz de un Sicilia que reclamó a las dos fuerzas que aplastaron la vida de su hijo: el Gobierno y la delincuencia. Desde ahí incluyó un primer componente de potencia de clase:

No es sólo el sincero sentimiento de solidaridad, sino también un instinto de autoprotección de clase; y no es el crimen en cuanto tal, sino el crimen dirigido a uno de sus miembros, lo que lleva a este sector a movilizar su capital social para marcar un límite a la violencia: el periodismo, la universidad, el medio cultural (y sus recursos no desdeñables: espacios en los medios, en las aulas, en las publicaciones, su manejo de las redes sociales,

su tiempo destinable al activismo) son el primer círculo que retransmite el mensaje y masifica la convocatoria (pp. 44-45).

Es claro que sin esta potencia el movimiento no habría encendido o siquiera se hubiera permitido que su llama se elevara visible entre las flamas del incendio, como muchas llamitas de clases pobres y empobrecidas convertidas en víctimas perennes. Ese fue el segundo elemento, la segunda potencia, la fuerza de unidad que desestabilizó la unidad de clase para crear un movimiento transversal, social y políticamente hablando. Un movimiento que en sí mismo logró expresar el dolor del amplio espectro de sus participantes en la conjunción de extremos que lograron convivir, dialogar y caminar juntos durante un tiempo no desdeñable. Por ello, “La medida del éxito [es] el número de encuentros que hizo posible [el movimiento] y la cantidad y calidad de voces para las que construyó un sitio de aparición” (p. 86). Voces que no sólo se dejaron oír, sino que, en su discurso, en su discurrir, en el encuentro con otras voces y problemas, se fueron transformando, fueron abandonando el claustro de la víctima absoluta para lograr articular un discurso donde ellos aparecían como sujetos plenos, dueños de una palabra cierta, total, sin matices:

La palabra de las víctimas, en su precariedad (y por ella) tiene la peculiaridad de que nada en ella es excesivo, tal vez por estar desprovista de todo poder institucional, por encontrarse por debajo de toda facultad sofisticada. Roland Barthes habló de la posibilidad de un discurso que no podría mentir aunque quisiera: ‘La palabra del oprimido no puede ser sino pobre, monótona, inmediata: su desnudamiento es la medida misma de su lenguaje: sólo tiene uno, siempre el mismo, aquel de sus actos; el metalenguaje es un lujo al que no puede acceder...’ La palabra de los oprimidos es real; es casi incapaz de mentir, pues la mentira es una riqueza... (p. 134).

Si algo combatió el movimiento fue la victimización como coartada para la inmovilidad y la criminalización como acción para la impunidad. Dos movimientos que se combinan para dejar aparecer la coherencia necesaria de un discurso que debe ser escuchado por los gobernantes y también por parte de los delincuentes, pero a estos últimos la interpelación exige la presencia y disposición de los primeros. Se trataba de disolver otra forma del sentido

común confeccionada por la infame guerra contra el narco: la criminalización, la asunción de que todo cuerpo calcinado por el fuego azulado por la estrategia de combate a la delincuencia organizada era parte de ese todo que debía ser eliminado sin dejar rastro, sin dejar memoria, desaparecer y ya, aunque su aparición entre las llamas se debiera a la infame formulación del “daño colateral”. Sentido común que afecta, principalmente, a la impartición de justicia, discurso que el movimiento, como efecto expansivo, combatió desde su propia conformación:

Tan interiorizado está en la conciencia colectiva el discurso de la criminalización, que los sucesivos oradores asumen espontáneamente la obligación de resaltar las virtudes personales y cotidianas del ser perdido (era alegre, sonriente, trabajador) como presentando las pruebas que lo exculparían del crimen que ha sufrido. El objetivo es deslindar a la persona de las actividades ilícitas, pero al fungir como un argumento principal de la denuncia se omite el hecho de que, en estricto sentido, el puro crimen debe bastar para exigir justicia. En este nivel de casi inexistencia se encuentra la cultura de la legalidad en el país; sólo tras meses de búsqueda las víctimas descubren (si lo hacen) que tienen derechos (p. 74).

El movimiento logró crear de entre las cenizas una gramática fuera de los cadáveres para acceder a los nombres propios, a las identidades y a la complejidad humana. Esta gramática articuló un discurso propio capaz de ser entendible para todos, accesible para todos, articulable por todos; “la articulación de un discurso que rebate al oficial, el encuentro con otros actores politizados, la disputa por hacer cambiar al gobierno su estrategia de combate al crimen, por hacer que el Estado asuma su responsabilidad ante las víctimas y cumpla su tarea de garantizar seguridad a la población” (p. 100). Significó esa nueva gramática, pero también se dejó ver, al proferirlo, su calidad de intransferible hacia el poder.

Uno de los aportes más interesantes de *El país del dolor* es la crítica al diálogo; no en sí al diálogo, sino a las reglas que se han establecido bajo la democracia mexicana acaecida a partir del 2000 con el triunfo de Vicente Fox. Se trata de un diálogo con gestos regañones que aparece cuando las cosas parecen desbordarse. Un diálogo que se exige al Gobierno en turno, con nudos en la garganta, definiendo el acento de quienes lo exigen, con indolencia en el semblante de quienes responden con un sí, ahora sí, hoy sí,

ya verán que como nunca, como ningún otro Gobierno, el mío sí, nosotros sí. El diálogo entre la ciudadanía y el Gobierno ha sido profuso en esta época democrática. A nadie se le cancela, mucho menos si tiene tras de sí fuerzas diversas con buen porte electoral. Pero el diálogo no trasciende, como si el puro diálogo fuera síntoma de trascendencia. Nos dice Suate: “Por el diálogo reiterado, la ciudadanía se convierte en el depositario de una confianza siempre defraudable pero siempre susceptible de renovación; el sujeto de un desengaño a plazos” (p. 132). La repetición del diálogo la torna en pantomima de una democracia de por sí circense. El diálogo sin efectos reales es pura entrada de información sin procesamiento. Pero el diálogo siempre fue la herramienta o el arma elegida por el movimiento, y en esa elección la inclusión del Gobierno estaba definida. La búsqueda de un pacto que implicara a los dialogantes en un fin común exigía el diálogo, a pesar de las devaluaciones sufridas por éste en el *País del dolor*. “Se trataba de trabajar por un proceso ideológico que pusiera al país en el camino de la descriminalización colectiva” (p. 159) y la provisión irrestricta de justicia, esto es, el procesamiento de todos los asesinatos sin importar la vida de las víctimas (fueran o no delincuentes). Y en la herramienta el movimiento descubrió el arma con que se le atacaría: “La contradicción que terminó por agotar al *MPJD* fue haber ofrecido legitimidad a un Estado que puede muy bien subsistir sin ella” (p. 187).

El diálogo sin efectos de realidad desgastó al movimiento. La misma realidad le impuso otras luchas, como el caso Ayotzinapa, con el cual no logró fundirse, quizá por la incompatibilidad de las víctimas o por la abulia generada ante la reiteración del mismo diálogo. Sin embargo, las tragedias que generaron ambos movimientos son compatibles en su centro, porque se trata de luchar contra la producción de vidas desechables, criminalizadas. Como bien observa Suaste:

Una de las muchas cuestas que nuestra sociedad deberá remontar es la tendencia a la culpabilización de las víctimas, esa sutil violencia ideológica que desde la vida cotidiana la sociedad vuelca sobre sí misma. Al adoptar esta postura la población se confabula con la violencia y se hace digna del Estado que hoy tiene (p. 189).

Esto es la impronta de una forma de actuar políticamente según la realidad de nuestra democracia, es decir, luchar por darle importancia a cada ser humano que habita este país, luchar por alcanzar la ciudadanía plena para todos, para

las víctimas, para los delincuentes, para los políticos que se suponen exentos de las obligaciones ciudadanas.